



Coordinadora Andaluza **Izquierda Unida**

26 de marzo de 2022

Informe político de la Coordinadora de IULV-CA

“Reitera su decidido apoyo a la celebración, sin más demora, de un referéndum libre, limpio e imparcial para el ejercicio del derecho de libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental, de conformidad con el Plan de Arreglo” Resolución 1033 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebrado el 19 de diciembre de 1995.

El pueblo saharauí ha vuelto a ser traicionado por el Reino de España, esta vez con el ignominioso giro de Pedro Sánchez y el silencio cómplice de su partido. Hoy, como siempre hemos hecho, apoyamos todas las movilizaciones populares en favor del cumplimiento del derecho internacional para con el pueblo saharauí y condenamos la vulneración de derechos humanos por parte de la dictadura marroquí con la anuencia, cuando no complicidad, de las principales potencias, entre ellas el Reino de España.

Contrasta vergonzantemente el envío de armas a Ucrania bajo la bandera de la defensa de la soberanía nacional ucrania mientras se niegan al pueblo saharauí, como al palestino, sus derechos reconocidos frente a países ocupantes, Marruecos e Israel. La guerra de Ucrania puede marcar un nuevo orden mundial por el tremebundo impacto en el conjunto de interrelaciones globales. No en vano, una tercera guerra mundial con el empleo de armas nucleares no es una hipótesis de ciencia ficción. Por eso es importante decir la verdad, aunque sea incómoda en el relato dominante: hay que parar la guerra con diplomacia. Es posible a pesar de quienes se sitúan cómodos

en el alargamiento del conflicto. Enviar armas es ineficiente, en términos militares, y muy peligroso para la seguridad mundial. La espiral belicista se sabe cuándo empieza pero no cuándo ni cómo acaba. Desde IUCA condenamos sin paliativos la invasión rusa de Ucrania, expresamos toda la solidaridad al pueblo ucranio y con quienes en Rusia sufren la represión por oponerse a la invasión.

Son numerosas las causas que han provocado este conflicto armado con implicaciones geopolíticas que se arrastra desde 2014. La internacionalización de la guerra sobre el terreno es evidente con la llegada de mercenarios y voluntarios neonazis de todas las partes del mundo. Esta experiencia militar y coordinación internacional que están adquiriendo grupos neonazis será fuente de graves amenazas para las democracias con el retorno a los países de origen tras el conflicto.

No obstante, merece señalar al menos dos factores. De una parte, el ultranacionalismo imbricado en el gobierno de Putin. Forma parte de la internacional reaccionaria que encuentra en la guerra y el militarismo sus peores expresiones. De otra parte, hay que contemplar la ruptura de los equilibrios entre EEUU y Rusia en torno a la expansión de la OTAN. Una Ucrania viable y pieza clave de la seguridad mundial solo se concibe desde su neutralidad entre ambas potencias.

El impacto de la guerra en España y en el conjunto de la sociedad europea está siendo terrible. A las consecuencias económicas hay que sumar las ideológicas.

Tenemos una inflación disparada que puede frustrar la recuperación económica y tenemos un giro conservador generalizado. La guerra establece un marco mental conservador que es aprovechado por Pedro Sánchez para contravenir la senda progresista que debería guiar el gobierno de coalición. En pocas semanas el PSOE y resto de fuerzas monárquicas han apoyado el envío de armas Ucrania, han propuesto aumentar el gasto militar y contribución a la OTAN, y han frustrado la investigación de los crímenes del franquismo. A este rosario se suma la renuncia por parte de Teresa Ribera a pedir a la UE la limitación del precio de la luz. La confrontación del PSOE con el acuerdo de gobierno es manifiesta. La inestabilidad derivada de la tensión resultante en el bloque de investidura, especialmente entre PSOE y UP, conduce a un escenario catastrófico. La temeridad de Pedro Sánchez, quien pudiera esperar mejor trato de Feijóo que el recibido por Casado, aumenta las posibilidades de crecimiento de la ultraderecha, tanto de vox como dentro del PP, ya que malogra la alternativa progresista que debía levantar el gobierno de coalición.

La conflictividad social ligada al encarecimiento de los suministros, especialmente la energía, imprescindibles para la actividad económica, está propiciando movilizaciones sociales en las que la ultraderecha consigue erigirse como referencia y extender sus bulos. La huelga del transporte es un síntoma de extenuación y hartazgo social entre un sector de trabajadores, muchos autónomos, que no pueden seguir esperando a que

se tomen medidas. Sobre estas condiciones opera la ultraderecha, al igual que en el sector agrícola. El gobierno debe tomarse en serio este hartazgo social y no parapetarse tras la crítica a la evidente manipulación de muchos mensajes. En este sentido, es muy importante la convocatoria de Comisiones Obreras por la escalada de precios. Vehicula el malestar social hacia posiciones que exigen medidas justas que mejoran la vida de las familias trabajadoras y la viabilidad de las pymes. La presión desde la izquierda en la calle es imprescindible para que el PSOE se atenga al acuerdo de gobierno y para que la ultraderecha no llene la calle de bulos.

El descalabro de la estrategia del Partido Popular adelantando las elecciones en Castilla y León y la posterior defenestración de Pablo Casado tienen su reflejo en Andalucía a través de varias vías: en primer lugar, porque esfumó la posibilidad de un adelanto electoral con el que amenazaba Moreno Bonilla dado el temor en el Partido Popular de enfrentarse a las urnas con la posibilidad real de perder la Junta de Andalucía; en segundo lugar, porque ha constatado que el PP no tiene ningún reparo en hacer propio el programa y narrativa de la ultraderecha, abriéndoles la puerta al gobierno de CyL. Esto avanza ya que no hay incógnita alguna por resolver con respecto a un posible acuerdo de gobierno entre Moreno Bonilla y Vox si los números se lo permiten. Moreno Bonilla no tendrá ningún reparto en gobernar con la ultraderecha. Y, en tercer lugar, porque el Partido Popular ha vuelto a demostrar que atajar los casos de corrupción que se dan en su seno no está entre sus prioridades. Muy al contrario, la primera opción es siempre encubrir estos casos y acallarlos sin mediar corrección o explicación alguna.

Es lo que ha ocurrido en Andalucía: el caso de corrupción Hispano Almería ha traído la imputación de la Consejera de Agricultura. Su declaración en el juzgado ha sido suspendida mientras mantenga su condición de aforada, por lo que sigue siendo parte de la causa que investiga la Caja B del PP de Almería. Moreno Bonilla se ha negado en reiteradas ocasiones a dar explicaciones sobre la corrupción de su partido e incumple su palabra y su acuerdo de Gobierno con Cs, según el cual la Consejera de Agricultura debería haber dejado al cargo al ser objeto de una investigación por corrupción. Es el mismo modus operandi que ha empleado ante otros casos de corrupción del Partido Popular, como el caso mascarillas, los contratos exprés, o la presencia de Javier Arenas -a día de hoy, presidente de Honor del PP- en los papeles de Bárcenas. Mutis por el foro. Moreno Bonilla representa al PP de siempre, un partido que tiene la corrupción en su ADN.

La situación de las capas populares andaluzas sigue atravesando serias dificultades, según los indicadores socioeconómicos la recuperación es más lenta que en el resto del país y la precariedad es mayor. No es casualidad, es fruto de la parálisis de un gobierno andaluz que vive envuelto en su burbuja y que renuncia a poner en marcha las políticas expansivas que se han abierto paso en el gobierno central y en la UE.

La sexta ola sacó a la luz nuevamente la incapacidad en la gestión de la sanidad pública andaluza del Gobierno de Moreno Bonilla y la hoja de ruta del desmantelamiento de lo público que están ejecutando. El descontento ciudadano se ha traducido en movilizaciones a lo largo y ancho de Andalucía. Especialmente importante fue la manifestación convocada por los sindicatos mayoritarios en todas las capitales de provincia. Todo ello llevó a Moreno Bonilla a "sentirse responsable" de la situación de la atención primaria. Incluso anunció un plan de refuerzo de la misma. Anuncios y propaganda que quedaron en nada. En estos últimos meses, ante la falta evidente de personal sanitario, el Gobierno andaluz se ha caracterizado por las ocurrencias (por ejemplo, la de recuperar a personal jubilado) que han fracasado. Todo para no acometer el necesario refuerzo estructural de personal en la plantilla del Servicio Andaluz de Salud, a pesar de contar con recursos suficientes para afrontarlo. Por más que el Gobierno andaluz ha intentado mantener un discurso triunfalista sobre la situación de la sanidad pública, la realidad se impone con un deterioro que sufren los andaluces y las andaluzas en primera persona. La preocupación fundada de la ciudadanía quedó patente en las mesas informativas que Unidas Podemos desplegó en todos los municipios de Andalucía. Así mismo, constatamos que la crítica a la gestión de la sanidad pública por parte de Moreno Bonilla es compartida por los agentes sociales implicados en el encuentro que celebremos en el Parlamento para recabar propuestas para la mejora de la calidad de la atención sanitaria en Andalucía.

El deterioro de los servicios públicos y la privatización se dejan notar también en el ámbito educativo. En el próximo curso se cerrarán más líneas públicas. Es decir, el Gobierno andaluz sigue recortando la educación pública en lugar de aprovechar el descenso de la natalidad para bajar la ratio en las aulas, que continúa por encima de lo que recomienda la ley. Además, el Consejo de Gobierno autorizó el mes pasado la apertura de varias universidades privadas, pese a que tienen varios informes negativos por no cumplir los estándares mínimos de calidad. Una de estas universidades ha sido promovida por la empresa MEDAC, fundada por Imbroda, Consejero de Educación. Es fundamental continuar con la movilización social en defensa de la educación pública gratuita, laica e inclusiva. En este sentido, participaremos activamente en la ILP por la bajada de la ratio que promueven USTEA y otras organizaciones.

En cuanto al deterioro de los servicios públicos, merece una mención particular la situación que atraviesa RTVA. A las carencias evidentes de recursos técnicos y humanos se suma una manipulación informativa en Canal Sur inédita hasta la fecha. Los informativos de Canal Sur, especialmente de la televisión, están secuestrados por el Partido Popular. Se reproduce insistentemente el argumentario del Gobierno andaluz, se omite la actividad de la oposición parlamentaria y, lo que es todavía más grave, se acalla la movilización social y el descontento existente entre la ciudadanía por la gestión del Gobierno de Moreno Bonilla. A la ingente cantidad de recursos

públicos que el Gobierno destina a la publicidad institucional al objeto de tener el favor de los medios de comunicación, hay que sumar una radiotelevisión pública que, según el propio Consejo Profesional de RTVA, incumple sistemáticamente los principios que deben regir la actividad de un medio público: la pluralidad, la independencia e imparcialidad, la rigurosidad y la veracidad.

Las políticas en materia de igualdad son negadas por este Gobierno andaluz. Un ejemplo paradigmático de la impostura con que Moreno Bonilla afronta la desigualdad entre hombres y mujeres: terminará la legislatura sin que su Gobierno haya nombrado a ninguna Hija Predilecta de Andalucía. Además, su gobierno continúa subvencionando a asociaciones que acosan a mujeres cuando deciden interrumpir voluntariamente su embarazo y frivoliza, por boca de su consejero de Salud, sobre la violencia de género. La sociedad igualitaria que propugna el feminismo es inviable con este gobierno andaluz imbuido de patriarcado, por mucho lazo morado que se ponga su presidente cada 8M.

Tampoco el ecologismo es una seña de identidad del gobierno andaluz. Estos meses han estado marcados también por el inicio de la tramitación parlamentaria de una proposición de ley de PP, Cs y Vox que pretende ampliar la superficie de las hectáreas de regadío en el entorno de Doñana. Es significativo que haya sido impulsada por los grupos parlamentarios y no por el Gobierno, lo que demuestra que Moreno Bonilla es consciente de que no es posible llevar a cabo lo que se recoge en esta proposición de ley, por dos motivos fundamentales: en primer lugar, porque no hay agua para satisfacer las expectativas que ha generado y, en segundo lugar, porque la propuesta choca frontalmente con el mandato del TJUE de cerrar los pozos ilegales. Esta iniciativa supondría la puntilla a Doñana, que ya está en serio riesgo de desertización. Además, agudizaría la competencia desleal con los agricultores que desarrollan su actividad legalmente. También afecta negativamente a la imagen del fruto rojo, que se comercializa en toda Europa. Lo que hay detrás, a costa de los numerosos perjuicios que ya está ocasionando, es la batalla en la que está inmerso el PP con la ultraderecha. El PP es consciente de que está generando a los agricultores que podrían estar afectados unas expectativas que no va a cumplir, pero quiere echarle el muerto al Gobierno de España o a la Comisión Europea. Todo por un puñado de votos. En este contexto, Unidas Podemos por Andalucía fue el único grupo que rechazó el inicio de la tramitación en el Parlamento.

Además, hemos desarrollado un importante trabajo político en este sentido: advertimos a la Comisión Europea de los planes del Gobierno andaluz -en su respuesta, la CE ya ha trasladado que usará todos los medios a su disposición para proteger Doñana-, mantuvimos un encuentro amplio con colectivos implicados en la defensa de Doñana en el Parlamento de Andalucía y, recientemente, hemos sido citados para

comparecer en la Comisión de Peticiones, en el Parlamento Europeo, en el mes de abril.

Doñana es un patrimonio natural de incalculable valor, seña de identidad de Andalucía, e IU Andalucía tiene un importante bagaje en la defensa del Parque Nacional frente a las distintas agresiones que sufre desde hace años. Seguiremos haciéndolo, con el propósito de paralizar cuanto antes la tramitación de esta iniciativa. Cada día que pasa con esta proposición de ley sobre la mesa es, además, una mala noticia para la reputación de Andalucía y de su agricultura.

La situación es paradigmática de nuestro tiempo: mientras la sequía acucia Andalucía (Andalucía, con 199.720 hectáreas, es la segunda comunidad autónoma española con más superficie en alto riesgo de desertificación) y la emergencia climática hace cada vez más estragos en nuestra tierra, el Gobierno del Partido Popular mira hacia otro lado para ganar unos cuantos votos. Andalucía necesita un Gobierno que proteja el patrimonio andaluz y ponga las luces largas. Sin agua y sin patrimonio natural no es posible el desarrollo socioeconómico de nuestra tierra.

La UNESCO, la Comisión Europea, el Gobierno de España, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y el movimiento ecologista se han expresado en este mismo sentido.

Por todo lo dicho anteriormente Andalucía necesita un cambio de gobierno y de sus políticas. IUCA debe jugar un papel crucial, como ha hecho en otros momentos de nuestra historia, en la edificación de una alternativa. Hemos de volcarnos con total valentía y audacia en el impulso de un proceso político amplio que incorpore a organizaciones políticas, sociales y referentes en sus ámbitos profesionales y en conflictos sociales. Recogiendo toda nuestra trayectoria vinculada al movimiento obrero, al andalucismo de izquierdas, al feminismo, al ecologismo y al pacifismo debemos construir un programa político participado en el que sea protagonista la sociedad civil incorporándola, de esta manera, a la acción política. Ese fue el mensaje del 4d al que nos debemos: un frente amplio que supere el actual espacio político sin dejar a nadie atrás. Hemos de ilusionar con una oferta electoral que vincule, de manera efectiva y no solo simbólica, al tejido social progresista andaluz. La masiva participación en la manifestación del último 28F demandaba esa unidad desde la pluralidad y esa voluntad de hacer protagonista del proceso a la sociedad civil. Las organizaciones debemos jugar nuestro papel para hacerlo posible. Hay que tomarse en serio que Unidas Podemos no puede conseguirlo en solitario, por eso actuar en consecuencia pide arrojo para tirar tabiques y ampliar el espacio político. La generosidad y altura de miras que tuvo Julio Anguita promoviendo Convocatoria por Andalucía es insoslayable en la emergencia democrática actual, necesitamos más que una suma de organizaciones. Aunque son imprescindibles, no son suficientes. El

electorado progresista demanda un espacio político capaz de recoger las particularidades de Andalucía, territorializado y también engarzado en la ola de ilusión abanderada por Yolanda Díaz. Tenemos mimbres para incorporar a Andalucía al nuevo ciclo político y mover ficha desde Andalucía en la configuración de un proyecto para un nuevo país. Desde IUCA contribuimos significativamente en el arraigo y organización, y en la oposición útil al gobierno andaluz. A esto se suma otra virtud de UPxA que favorece la construcción de un frente amplio en Andalucía para ganar la JUNTA para la mayoría social: tenemos referencialidad estatal, expresamos un proyecto andaluz para un nuevo país.

Los próximos meses son de intensa actividad política y movilización social. Varias tareas deben comprender al conjunto de la organización:

- La elaboración programática participativa y abierta a la ciudadanía para erigir una alternativa política para Andalucía.
- La consulta ciudadana por la República del próximo 14 de mayo. Esta debe ir precedida de una agenda de actos públicos que sirvan para defender un proyecto para un nuevo país y que sirvan para ampliar alianzas en torno a la alternativa republicana.
- Contracumbre de la OTAN en junio. La guerra de Ucrania se está utilizando para poner en valor a la OTAN y para propiciar el aumento del gasto armamentístico por sus países miembros. Hay que hacer pedagogía y movilizar para que la ciudadanía mantenga los tradicionales valores pacifistas. La estrategia de seguridad de la UE debe ser autónoma de la OTAN.